

IZQUIERDA Y ESTABILIDAD DE LA DEMOCRACIA EN
AMÉRICA LATINA: LA IDEOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA Y SU REPERCUSIÓN SOBRE EL PROCESO
POLÍTICO EN VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

*The left and the democratic stability in Latin America:
the ideology of the Bolivarian Revolution and its impact on the
political processes in Venezuela and Latin America*

José Enrique MOLINA

Universidad de Zulia, Venezuela-Universidad de Michigan

✉ jmolina@umich.edu

BIBLID [1130-2887 (2003) 35, 169-198]

Fecha de recepción: febrero del 2003

Fecha de aceptación y versión final: agosto del 2003

RESUMEN: Los factores vinculados a la estabilidad o inestabilidad de los sistemas políticos y la democracia han sido una preocupación central de la política comparada y la teoría política. Este trabajo se centra en analizar un factor que adquiere nueva importancia dado el resurgimiento de la izquierda en América Latina, pero que no ha estado en el centro del debate académico sobre la estabilidad democrática: la polarización ideológica producida por el adelanto de un proyecto político de izquierda desde el gobierno. Su análisis se enmarca en los enfoques teóricos sobre la estabilidad de la democracia y los sistemas políticos. Dentro del contexto de los gobiernos de izquierda en América Latina, se analiza el proyecto ideológico adelantado por el movimiento bolivariano en Venezuela y su asociación con la inestabilidad política acaecida en este país durante 2002 y 2003. Se concluye que, dada la experiencia de América Latina, la aplicación de un proyecto de izquierda sin negociación social y con visos autoritarios, es un factor de inestabilidad política que tiende a hacer inviable el proyecto mismo de cambio social.

Palabras clave: ideología, democracia, gobernabilidad, política venezolana, política latinoamericana.

ABSTRACT: One of the main areas of work in Comparative Politics and Political Theory has been the determination of the variables associated with the stability/instability of political systems in general, and democracy in particular. This paper focuses on one of these variables. One with newly acquired importance after the recent electoral successes by the left, but that

nevertheless has not been in the spotlight of scholarly analysis: ideological polarization. Particularly, ideological polarization brought about by the attempt to pursue by the government a leftist political project. The main focus is on the ideological project pursued by the Venezuelan Bolivarian Government and its association with the political instability of 2002 and 2003. The paper considers this topic taken into account mainstream theoretical approaches on political stability, and the experience of previous Latin American leftist governments. The paper reaches the conclusion that in Latin America the attempt to implement a socialist program by a democratically elected government, if it is done without meaningful social and political negotiation, and with authoritarian overtones, is likely to lead to intense political instability and to the ultimate failure of the proposed social change.

Key words: ideology, democracy, gobernability, Venezuelan politics, Latin-American politics.

I. INTRODUCCIÓN

La teoría de la democracia, así como los diversos análisis relativos a la estabilidad de los sistemas políticos, ha propuesto distintos factores vinculados a la inestabilidad política y, en particular, la de los sistemas democráticos. En el presente trabajo se aborda el caso de la inestabilidad de la democracia venezolana a partir del ascenso al gobierno de Hugo Chávez y la vinculación de esta inestabilidad con la orientación ideológica del nuevo gobierno; así como las repercusiones que ello tiene para el análisis de la estabilidad de la democracia en América Latina¹.

La literatura sobre los factores que influyen en la estabilidad de los sistemas políticos y la democracia en particular (Shapiro, 2002) puede considerarse integrada por cinco enfoques según se ponga el acento en la economía, las instituciones, la cultura política, factores psico/sociales o los intereses estratégicos de los actores. Esta perspectiva permite vincular la teoría sobre la estabilidad de los sistemas políticos con la teoría de la estabilidad de la democracia, dado que a pesar de la separación que ha prevalecido a nivel académico (Laitin, 2002), el análisis de la estabilidad de la democracia debe formar parte del estudio más general de la estabilidad de los sistemas políticos. Así, los análisis teóricos del enfoque de la modernización (Lipset, 1959; Huntington, 1991) o que pudieran considerarse de neomodernización (Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi, 2000) ponen el acento en el nivel de desarrollo económico alcanzado. Przeworski y sus colegas (2000), en el trabajo reciente de mayor influencia sobre este tema, demuestran cómo de la abundante evidencia empírica considerada por ellos se desprende que si bien el desarrollo económico no resulta en sus datos asociado a las transformaciones de las dictaduras en democracias, o viceversa, sí resulta ser un factor casi inexpugnable de estabilidad. Es decir, el planteamiento tradicional del enfoque de la modernización se equivocó al creer que el desarrollo económico haría que las dictaduras se transformaran en democracias, pero tuvo razón

1. El autor agradece al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia por el apoyo financiero a la investigación que sirve de base a este trabajo.

en cuanto a su relación con la estabilidad de las mismas (Lipset, 1959; Huntington, 1991: 271-272). Las democracias son frágiles en países subdesarrollados y estables en países industrializados. Sin embargo, resulta claro de los datos y análisis presentados por Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi (2000), que también en los países subdesarrollados hay democracias bastante estables, lo que indica que en ausencia de desarrollo económico otros factores determinan el grado de estabilidad o inestabilidad del sistema político. Ello también implica que el desarrollo económico actúa sobre la estabilidad debido a su efecto sobre otras variables tales como la cultura política, la propensión a la conflictividad social, la polarización ideológica, la intensidad de la movilización política. Estas variables, resaltadas por los otros enfoques, pueden actuar para determinar la estabilidad política aun en ausencia de desarrollo económico, de allí la importancia de tomarla en consideración para el análisis de la democracia en América Latina.

Aún dentro del análisis de los factores económicos, Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi (2002) encuentran que las democracias en países subdesarrollados son menos estables en situación de decrecimiento económico y de mayor desigualdad. Esto puede ser explicado por enfoques socio psicológicos como el de Gurr (1968 y 1974) y Auvinen (1997), que consideran que la inestabilidad política se produce como consecuencia de un conjunto de factores que resumen en «privación relativa» y «movilización política», poniendo el acento en la primera. La privación relativa se produce cuando un sector relevante de la sociedad considera que tiene derecho a bienes o condiciones que no recibe o ha perdido. Este sentimiento de privación relativa puede estar referido a la condición socioeconómica o a la participación y derechos políticos. El subdesarrollo, el deterioro económico y la desigualdad tienden a generar sentimientos de privación económica que pueden, de acuerdo a su intensidad, estar en el origen de movilizaciones políticas desestabilizadoras. Lo mismo podría ocurrir con la discriminación política, la intervención de potencia extranjera o el autoritarismo.

Przeworski (1991: 32) en un planteamiento desde la perspectiva de la decisión racional, pero perfectamente compatible con el enfoque sociopsicológico, ha planteado cómo la estabilidad depende de que los grupos con capacidad de desestabilización consideren que sus intereses pueden ser preservados dentro de la institucionalidad democrática, lo cual no ocurriría si se perciben en una situación de privación relativa duradera. También el contexto internacional ha sido un factor tomado en cuenta (Diamond, Hartlyn y Linz, 1999). Estudios desde la perspectiva del enfoque institucional (Linz, 1994), ratificados por el análisis de Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi (2002), han encontrado que las democracias presidenciales han tendido a ser más frágiles que las parlamentarias, lo cual pareciera deberse a la mayor frecuencia en el presidencialismo de sistemas políticos en los que el Ejecutivo se encuentra en minoría en la legislatura (Mainwaring y Shugart, 1997; Shugart y Carey, 1992) y no prima una orientación hacia el acuerdo entre las fuerzas políticas; de modo que, tanto la polarización como la radicalización del juego político, tienden a ser más frecuentes. También en el terreno del análisis institucional, se ha puesto de relieve cómo las características del sistema de partidos están vinculadas a la estabilidad de la democracia. Sartori (1976)

ha demostrado cómo el elevado número de partidos, acompañado de polarización ideológica (sistema de multipartidismo polarizado), genera tendencias centrípetas que hacen frágiles a las democracias con estas características. Por su parte, Mainwaring (1999) y Mainwaring y Scully (1975), han analizado el nivel de institucionalización del sistema de partidos y también han planteado con respaldo empírico sobre América Latina: que a menor grado de institucionalización del sistema de partidos, mayor la inestabilidad política y fragilidad de la democracia.

En el caso de América Latina, la acción de los Estados Unidos para prevenir la expansión del comunismo dentro del contexto de la guerra fría, fue claramente un factor desestabilizador de la democracia cuando algún gobierno latinoamericano se inclinaba a la izquierda, como el caso de Chile. El fin de la guerra fría obviamente ha creado un contexto internacional diferente, que aparentemente resulta menos desfavorable al desarrollo de experimentos democráticos de izquierda en la región.

Por su parte, el enfoque de cultura política ha puesto el acento en la orientación democrática tanto de las élites económicas, políticas y militares como de la población, en cuanto factores de estabilidad o inestabilidad (Inglehart, 2003; Huntington, 1991; Putnam, 1993; Shapiro, 2002; Canache, 2002).

De esta literatura que hemos mencionado, se desprende: en primer lugar, que el subdesarrollo en sí mismo implica la ausencia del nivel económico que tiende a garantizar estabilidad a las democracias. Éste es el aporte fundamental del trabajo de Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi (2000). Esta fragilidad de las democracias del subdesarrollo puede explicarse por el alto potencial para la conflictividad social que está asociado a la pobreza y las desigualdades extremas, que crean condiciones para la radicalización y movilización política basada en el sentimiento de privación relativa. En estas condiciones, en los países subdesarrollados la estabilidad de las democracias es menor que en los países desarrollados; pero, sin embargo, es posible y depende de factores económicos, institucionales y culturales como los antes mencionados. Dentro de estos factores, queremos destacar en este trabajo, el de la «polarización» política producto de la orientación ideológica del proyecto político adelantado desde el gobierno. Este factor, aunque ha sido tomado en cuenta tanto por el enfoque sociopsicológico (privación relativa de derechos políticos) como por el institucional (polarización del sistema de partidos), no ha recibido en relación a América Latina la relevancia requerida, especialmente para un período como el actual que ha visto resurgir la opción de izquierda en diversos países, en algunos casos con clara connotación de democracia radical.

Si bien el caso más claro en el cual la polarización ideológica derivada de la aplicación de un proyecto político de izquierda estuvo asociada a la rebelión de la clase empresarial y media y a la desestabilización de la democracia en América Latina, fue el de Chile; también es cierto que tanto en Nicaragua como en Venezuela, la presencia de proyectos políticos de izquierda ha estado asociada a procesos de desestabilización y, al menos en Venezuela, a una abierta rebelión de la clase empresarial y media que ha estado vinculada a intentos de ruptura de la institucionalidad similares al ocurrido en Chile, aunque afortunadamente sin los mismos resultados. Auvinen (1997)

apreció en 1997 que el factor ideológico no había sido central para los conflictos en países no industrializados. Sin embargo, los recientes desarrollos en América Latina han puesto de nuevo el factor ideológico en el centro de los posibles elementos que puedan contribuir a la desestabilización de estas democracias frágiles (Canache, 2002: 6); de allí, la importancia de explorar un caso como el venezolano para determinar hasta dónde hemos estado en presencia de un proceso de desestabilización asociado a la polarización ideológica, cómo ha operado este factor y cuáles son sus posibles repercusiones en la región.

Las diferencias ideológicas son parte sustancial del proceso democrático y, en mayor o menor grado, lo han acompañado desde sus comienzos. En sí mismas, no son un factor de desestabilización. Pueden tener este efecto cuando proponen un curso que es percibido como una amenaza a sus intereses fundamentales por uno de los sectores sociales, especialmente si éste tiene capacidad de movilización y recursos políticos considerables. Por ejemplo, cuando se trata de una corporación como la militar, la Iglesia, el sector empresarial, un grupo étnico, la clase media, etc. Amenazado en sus intereses fundamentales, este sector se percibirá privado de los que considera sus derechos esenciales. Aun en este caso, si el proyecto político es presentado como una opción negociable, cuya aplicación estará sujeta no sólo al juego de las mayorías y minorías, sino también al proceso de negociación social, entonces, las posibilidades de conflicto se verán disminuidas porque el sector social afectado sentirá que puede lograr un arreglo aceptable dentro de la institucionalidad democrática. Por el contrario, cuando los sectores sociales se ven excluidos, aun cuando sea informalmente de la negociación política, y el proyecto ideológico al que se oponen se intenta imponer al ritmo marcado por el gobierno, sin que se les permita influir para modificarlo, de modo que sus intereses sean tomados en cuenta, entonces, la sensación de privación relativa se acentúa, tal como lo plantea el enfoque sociopsicológico. Al mismo tiempo, tal como se deriva de los aportes del modelo de decisión racional, las opciones de cooperación en la democracia tienden a cerrarse para el sector afectado, particularmente cuando el proyecto ideológico que se aplica es percibido como autoritario. En este caso, los sectores afectados por las políticas gubernamentales podrían llegar a la conclusión de que no habrá oportunidad electoral en el futuro en la que puedan elegir un gobierno distinto, lo cual acentúa su tendencia a buscar salidas no institucionales. En este punto encontramos coincidencia de los diversos enfoques.

El autoritarismo conlleva, por parte de los sectores que lo sufren, un fuerte sentimiento de haber perdido derechos políticos fundamentales, así como las opciones institucionales para resolver la crisis económica (privación relativa en lo político y lo económico según el enfoque sociopsicológico). Al mismo tiempo, genera en sectores sociales claves el convencimiento de que sus intereses no pueden ser promovidos por vía institucional, de modo que se rompe el incentivo del «interés propio» para el cumplimiento voluntario y espontáneo, considerado base de la estabilidad por el enfoque económico de la decisión racional (Przeworski, 1991: 19). A su vez, la aparición de un proyecto autoritario implica la ausencia de la «cultura política democrática» a nivel de las élites, considerada fundamental por el enfoque de cultura política. Particularmente

porque la percepción del resto de los actores de que el proyecto gubernamental es autoritario, implica que desaparece un elemento que este enfoque considera parte esencial de la estabilidad y cultura democrática: la confianza en que el adversario respetará las reglas del juego y permitirá la alternancia en el poder de ser derrotado en las elecciones (Inglehart, 2003: 55). Así pues, a pesar de que no ha recibido mucha atención en la literatura reciente sobre la inestabilidad de las democracias, la polarización ideológica, particularmente la que se deriva de la promoción de un proyecto de izquierda desde el gobierno en el contexto de un país latinoamericano, aparece como un factor potencial de desestabilización de acuerdo a la teoría democrática contemporánea. Al mismo tiempo, resulta ser un factor de mucho interés dado no sólo que ya ha estado vinculado a eventos de inestabilidad política en Chile y Nicaragua, sino que al mismo tiempo resulta ser una posibilidad cierta en varios de los países latinoamericanos en los cuales la izquierda es o ha sido recientemente un componente importante del gobierno (Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile), o de la principal fuerza de oposición (El Salvador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua).

En este trabajo exploraremos hasta qué punto la inestabilidad política vivida en Venezuela durante el año 2002 ha estado asociada a la polarización ideológica derivada de la promoción desde el gobierno de un proyecto político de izquierda; con el objeto de determinar si se confirma o no, el carácter de elemento de posible desestabilización, que según la teoría este elemento entraña en un país subdesarrollado, particularmente, cuando aparece en su versión autoritaria. Esta confirmación nos permite no sólo explicar sino también esperar desarrollos similares en los países donde se comienza a adelantar proyectos de contenido izquierdista significativo con capacidad de antagonizar a las élites económicas como en Brasil; y, al mismo tiempo, explorar la posibilidad de reducción del conflicto, especialmente en sus aspectos más agudos, si se evitan las características autoritarias del mismo. En el caso venezolano, como demostraremos, el carácter autoritario del proyecto bolivariano ha sido un factor fundamental en la exacerbación del conflicto, porque muy posiblemente los sectores protagonistas del mismo desde la oposición (particularmente las organizaciones empresariales, el movimiento obrero organizado y las asociaciones civiles de la clase media) hubieran asumido una actitud menos radical de tener la percepción clara de que las vías institucionales al cambio político no se cerrarían, o de que el proyecto gubernamental era negociable.

A partir de febrero de 1999, el gobierno de Hugo Chávez ha planteado a los venezolanos la realización de una Revolución Bolivariana, pacífica y democrática; cuyos contornos ideológicos no han sido expresados dentro de los esquemas acostumbrados en la política contemporánea: socialismo/capitalismo; izquierda/derecha; democracia representativa/autoritarismo. Por el contrario, la coalición gubernamental ha insistido en que se trata de un camino novedoso que el propio Chávez, en una oportunidad, asimiló a la «Tercera Vía» del laborismo británico y cuya originalidad derivaría de su adaptación a las características históricas, culturales, sociales y económicas de Venezuela y América Latina. Tanto, que sus fuentes ideológicas estarían en personajes vinculados a la lucha de independencia en el siglo XIX como Simón Bolívar y Simón Rodríguez,

o de las guerras civiles de ese mismo siglo: Ezequiel Zamora. Lo que la retórica de la Revolución Bolivariana ha llamado «El Árbol de las Tres Raíces» (Movimiento v República, 2000). El presente trabajo discute la ubicación ideológica del proyecto político bolivariano, tomando en consideración la literatura académica, los documentos y declaraciones emitidas por los dirigentes del proyecto bolivariano, las medidas adoptadas (específicamente la Ley de Tierras), la ubicación en temas vinculados a la ideología de los diputados del Movimiento v República (MVR) con base en el Estudio Élités Parlamentarias en América Latina², y también la ubicación ideológica de los ciudadanos que presentan identificación partidista o se declaran independientes con simpatía hacia el partido de gobierno (Estudio Mundial de Valores, 2000)³.

La investigación académica ha demostrado que la ubicación ideológica de los gobiernos y sus proyectos políticos tienen consecuencias en cuanto a la política que se puede esperar de ellos, aun en el caso de sistemas políticos donde las diferencias ideológicas aparecen atenuadas, como entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos (Tuftes, 1978). En el caso de Venezuela, donde la literatura académica discute sobre si la Revolución Bolivariana implica un proyecto autoritario o democrático, socialista o capitalista, parece evidente que las precisiones al respecto son fundamentales para entender el camino seguido hasta ahora y lo que podría esperarse en el futuro. La ideología del proyecto político bolivariano no es la única variable a considerar pero sí es un factor importante que entra en juego conjuntamente con otros para contribuir a darle forma a la política venezolana. La ubicación ideológica del proyecto nos permite conocer los objetivos de mediano y largo plazo de la «Revolución Bolivariana», aunque éstos puedan resultar modificados y neutralizados por la acción de los otros actores, la cultura política dominante en la sociedad, etc. También permite dilucidar si la inestabilidad política que se ha presentado en Venezuela durante 2002 y 2003 está asociada a la orientación ideológica del proyecto bolivariano. Por las razones antes presentadas, consideraremos que esta asociación existe, si puede demostrarse que el proyecto bolivariano tiene una orientación de izquierda autoritaria, plausible de generar sentimientos de privación relativa por la potencial amenaza de los intereses fundamentales de las clases empresarial y media, y su percepción de que las vías institucionales para cambiar el rumbo político están cerradas o seriamente obstruidas.

La teoría política ha reconocido como dimensiones fundamentales para la ubicación ideológica de los movimientos y sistemas políticos: por una parte, su orientación en cuanto al régimen político; y por la otra, el sistema socioeconómico que se propicia (Bobbio, 1995; Duverger, 1980: 38). La primera dimensión, que pudiera también

2. La información sobre las posiciones ideológicas de los diputados del MVR es tomada de la presentación del Estudio Élités Parlamentarias de América Latina dirigido por Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca con referencia a Venezuela, realizada por María Luisa RAMOS ROLLÓN (2002) y Elena MARTÍNEZ BARAHONA (2002a y 2002b).

3. El Estudio Mundial de Valores es dirigido por el profesor Ronald Inglehart de la Universidad de Michigan, la encuesta para Venezuela fue coordinada por la Red Universitaria de Estudios Políticos (Redpol) y administrada por la empresa DATOS, a una muestra nacional de 1.200 personas, en diciembre de 2000.

considerarse relativa a la libertad política, nos permite ubicar a los movimientos en el eje democracia/autoritarismo. La segunda dimensión, que pudiera considerarse como relativa a la igualdad social (Bobbio, 1995: 133-152), permite ubicar a los movimientos políticos en el eje: izquierda/derecha, o como lo hace Duverger (1980: 38) en el eje socialismo/capitalismo. Habría entonces cuatro categorías básicas: izquierda democrática, derecha democrática, izquierda autoritaria y derecha autoritaria (Bobbio, 1995: 162; Duverger, 1980: 38). Siguiendo a Bobbio (1995: 152), la dimensión izquierda/derecha viene dada por la posición de los movimientos con relación a la «igualdad». La izquierda se caracteriza por tener como una de sus prioridades el incremento de la igualdad socioeconómica existente y la lucha contra la desigualdad social; mientras que la derecha no considera la superación de la desigualdad socioeconómica como uno de sus objetivos prioritarios. Dentro de los movimientos de izquierda son característicos los movimientos socialistas en sus diversas modalidades, aunque en algunos sistemas políticos se consideran de izquierda movimientos sin definición socialista, pero que con respecto a sus rivales tienen una tendencia más igualitaria. Es decir, la oposición izquierda/derecha usualmente, pero no siempre, coincide con la oposición socialismo/capitalismo. La segunda dimensión viene dada por la posición de los respectivos movimientos frente a la democracia, entendida ésta como un procedimiento para la selección de los gobernantes en elecciones competitivas, libres, honestas, periódicas, con sufragio universal y disfrute de los derechos civiles y políticos básicos tales como libertad de información, de expresión y de organización política (Dahl, 1999). Bobbio (1995: 155-163) denomina a esta segunda dimensión la de la «libertad» y, al efecto, clasifica a los movimientos como extremistas y moderados (de centro); sin embargo, como este autor indica, la antidemocracia es el punto común más persistente y significativo entre los extremistas de derecha e izquierda, por lo cual resulta válido interpretar esta dimensión como coincidente con el eje democracia/autoritarismo que utilizaremos en nuestro análisis.

El trabajo utiliza esta clasificación para ubicar el proyecto político bolivariano, tanto en el eje democracia/autoritarismo, como en el izquierda/derecha. Como se verá, la literatura ha oscilado tanto en una dimensión como en otra en cuanto a la ubicación ideológica del movimiento bolivariano. Esto es explicable por tres razones. La primera, es que la coalición que le sirve de apoyo al proyecto bolivariano ha ido variando. Para la elección de 1998, la misma incluía: a) extrema izquierda: políticos que pertenecieron a movimientos que participaron en la insurrección armada contra los gobiernos democráticos sin apartarse nunca de la orientación insurreccional y militares retirados izquierdistas que participaron en los intentos de golpe de Estado de 1992, un núcleo importante de los dirigentes del Partido Patria Para Todos (PPT); b) izquierda democrática: el Movimiento al Socialismo (MAS) y el sector agrupado en torno a Luis Miquilena, segundo en jerarquía en la coalición inicial detrás de Chávez; c) derecha democrática: cuya figura emblemática fue Alfredo Peña, hoy alcalde mayor de Caracas; d) derecha autoritaria: militares retirados de derecha que participaron en los intentos de golpe de Estado de 1992, entre los que destacan Luis Urdaneta y Francisco Visconti. La policromía política de los comienzos hacía difícil precisar cuál sería la orientación

dominante (Levine, 2001). La segunda, es que en armonía con dicha composición de la coalición inicial, la política económica del gobierno parecía ser una prolongación de la «Agenda Venezuela» del gobierno anterior. El gobierno ratificó y mantuvo cerca de un año a la ministra de Finanzas del gobierno de Caldera. La tercera razón, es que Chávez se ha negado reiteradamente a adscribir su proyecto a una corriente ideológica. Nunca ha calificado su proyecto como socialista o de izquierda y ha insistido en su condición de democrático, aunque una democracia diferente a la que existió en Venezuela entre 1958 y 1998. No una democracia representativa, sino participativa. Esta indefinición aparece reiteradamente en las entrevistas concedidas a Blanco Muñoz entre 1995 y 1998, antes de la victoria electoral (Blanco Muñoz, 1998).

A pesar de la extensa gama ideológica en la coalición inicial, de las primeras medidas económicas y de la falta de una autodefinición por parte del movimiento bolivariano, existen suficientes datos, tal como se demostrará, para ubicarlo en las dos dimensiones ideológicas propuestas. Por una parte, la coalición inicial se ha venido decantando. La izquierda moderada y la derecha han abandonado el gobierno, de modo que la coalición actual está integrada en forma absolutamente dominante por la izquierda radical civil y militar. Por la otra, las medidas adoptadas en instrumentos legales, como la Ley de Tierras y propuestas recientes en cuanto al modelo económico, permiten igualmente su ubicación en el eje izquierda/derecha y, más específicamente, socialismo/capitalismo. Es particularmente significativa la forma de relacionar el Estado con la sociedad civil, ésta se ha caracterizado por la negación a todo tipo de negociación en cuanto al modelo político y económico con los factores sociales afectados, a los cuales se llama a someterse con base a la supuesta legalidad y legitimidad del gobierno. Una política de confrontación que forma parte sustancial del proyecto político y que permite ubicarlo, conjuntamente con el resto de los elementos que se desarrollaran, como un proyecto situado en el campo de la izquierda autoritaria. Un proyecto cuyas notas más características son: la falta de compromiso con la democracia representativa y la tendencia a imponer un programa económico, que podría caracterizarse como de una economía mixta que privilegia al sector estatal y cooperativo, y cuyos componentes estarían subordinados políticamente al gobierno bolivariano.

De demostrarse la ubicación del proyecto político bolivariano en el campo de la izquierda autoritaria, tal como propone este trabajo, consideramos plausible asumir, por las razones teóricas antes especificadas, que su introducción en el contexto político es la causa que desata la inestabilidad política que ha vivido el país, en un contexto que se podría caracterizar como de fragilidad de la democracia o de inestabilidad potencial. Venezuela venía presentando, desde varios años atrás, la acumulación de las condiciones que la literatura ha encontrado asociadas a la inestabilidad de la democracia: país subdesarrollado, con decrecimiento económico desde comienzos de la década de 1980, altos niveles de desigualdad social, presidencialismo, un sistema de partidos que había devenido en multipartidismo polarizado y desinstitucionalizado desde 1993, elevados niveles de desconfianza interpersonal, acompañados de un apoyo popular elevado pero no exento de equívocos a la democracia. A pesar de ello, no es sino hasta diciembre de 2001, que se produce una rebelión abierta de la clase empresarial, el

sindicalismo organizado y la clase media, en medio de un deterioro creciente de la popularidad gubernamental, que desembocó en un intento abierto de golpe de Estado en abril de 2002 y un paro nacional dirigido en buena medida a provocar la caída inmediata del gobierno a finales de ese mismo año.

Es el objetivo del trabajo demostrar que las medidas puestas en vigencia por el gobierno a finales del año 2000, en el paquete llamado Leyes de la Habilitante, así como el paulatino develamiento de sus metas ideológico-políticas, dado su carácter autoritario, son causas de esta «rebelión» y de la inestabilidad política subsiguiente, tanto porque llevaron a la clase empresarial y media al convencimiento de que sus intereses fundamentales estaban en peligro, como porque al mismo tiempo generaron la percepción de que el gobierno cerrará las vías institucionales para dirimir el conflicto por vía democrática. De quedar esto demostrado, ello tiene implicaciones para el resto de América Latina, particularmente para el caso de países que han electo recientemente gobiernos de izquierda, con importantes elementos de izquierda radical en su coalición. El caso venezolano parece implicar que la fragilidad inherente a las democracias en países subdesarrollados se multiplica peligrosamente cuando se intenta imponer un proyecto de orientación izquierdista en confrontación abierta con el sector empresarial y la clase media, aun en un contexto internacional postguerra fría y, por ello, mucho más favorable a la estabilidad democrática que el existente en el momento del derrocamiento de Allende.

En la primera sección, se considera la literatura que ha analizado la ubicación ideológica del proyecto bolivariano y se esquematizan las diferentes hipótesis que de ella se derivan, especialmente las que sirven de alternativa a la que hemos presentado. En la sección segunda, se estudian las evidencias que permiten clasificar al proyecto bolivariano en el eje democracia/autoritarismo. En la sección tercera, se hace lo propio con el eje izquierda/derecha. Finalmente, en la sección cuarta, se presentan conclusiones y se exploran las consecuencias de éstas para el proceso político venezolano.

II. LA INDEFINICIÓN IDEOLÓGICA COMO ESTRATEGIA POLÍTICA

Chávez y el MVR han cultivado la indefinición en torno a su proyecto político, al menos en cuanto se refiere a clasificarlo en las categorías usuales como las presentadas anteriormente. Para ello se ha recurrido a una propuesta que más es lo que confunde que lo que aclara: la tesis del «Árbol de las Tres Raíces» (Movimiento v República, 2000; Garrido, 2002). Según esta tesis, la fuente fundamental de la ideología bolivariana estaría en el pensamiento y la acción de tres de los principales actores de la Venezuela del siglo XIX: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Salvo la vinculación simbólica con algunos principios bastante generales (nacionalismo mediante Bolívar; originalidad mediante Rodríguez; preferencia por el pueblo frente a la oligarquía en Zamora y también en Rodríguez), es realmente muy poco lo que se puede obtener en claro del análisis de estas fuentes. En consecuencia, quienes han analizado el planteamiento ideológico del proyecto bolivariano han debido recurrir al estudio de

la acción gubernamental, documentos y expresiones aisladas para llegar a conclusiones. Una acción gubernamental que también ha tendido a aparecer como confusa y, en algunos casos, contradictoria con los documentos y declaraciones (Ellner y Hellinger, 2003; Lombardi, 2003); aunque algunos elementos, en cuanto a sus objetivos, parecen estar bien definidos después de cuatro años de gobierno. Este gusto por la indefinición, o como dirían los propulsores del proyecto bolivariano, por inventar y ser originales, también ha tenido como consecuencia que los autores tiendan a ser más categóricos en sus apreciaciones en la medida en que escriben en épocas más avanzadas del proyecto.

Un grupo de autores ha destacado el carácter populista y de antipolítica del proyecto bolivariano, resaltando con ello rasgos como el liderazgo carismático, la tendencia plebiscitaria y el discurso de ruptura con el liderazgo y las instituciones anteriores (Rivas Leone, 2002; Hernández, 2001; Ellner, 2001; Roberts, 2003; Levine, 2001; Gómez y Arenas, 2002; Arenas, 2002; Ramos Jiménez, 2002; Ramos Rollón, 2002). Ramos Jiménez (2002) plantea cómo la tendencia populista tiende a no adaptarse al respeto al Estado de Derecho y, por ello mismo, encuentra dificultades en su convivencia con la democracia. Este autor destaca, dentro de las características del populismo bolivariano, la tendencia a asumir una concepción plebiscitaria de la democracia. Democracia plebiscitaria en cuanto se prefiere recurrir a la consulta popular formal o informal como mecanismo de legitimación de la acción política, por encima de la negociación parlamentaria o social. Uno de los rasgos más importantes, y a mi parecer más definitorios en lo ideológico, es la resistencia y, más que eso, el rechazo del movimiento bolivariano a la negociación política o social. Se propuso su suplantación por la consulta popular directa, en lo que formalmente se llamó «democracia participativa» y, como tal, se introdujo en la Constitución de 1999 (art. 6) en reemplazo del principio de democracia representativa. Cuando se discutió en la Organización de Estados Americanos la Carta Democrática que se adoptó en el 2001, es conocido cómo el gobierno de Hugo Chávez se opuso a la noción de democracia representativa, insistiendo en su sustitución o al menos complemento con la noción de democracia participativa. Hasta qué punto la «democracia participativa» o plebiscitaria del movimiento bolivariano es democracia en el sentido procedimental moderno es un punto que discutiremos más adelante.

Basándose en este rasgo plebiscitario, así como en la sistemática acción dirigida al control político de todos los poderes públicos para ponerlos al servicio del proyecto político bolivariano, Álvarez (2002) ha caracterizado el gobierno de Chávez como una democracia delegativa en los términos planteados por O'Donnell (1999: 159-173). La democracia delegativa es un tipo de democracia de calidad disminuida, pero que aún puede ser considerada como un régimen que cumple con los requisitos mínimos de la democracia representativa. En este sentido, en la medida en que el proyecto político bolivariano se mantuviera dentro de los límites de la democracia delegativa sería un proyecto democrático. Aunque como decimos de una democracia de baja calidad en la cual los mecanismos de peso y contrapeso, o de control horizontal como los denomina O'Donnell (1999: 159-173), estarían sumamente disminuidos, con la consiguiente

exacerbación del presidencialismo y el deterioro profundo del Estado de Derecho. Como hemos dicho, ello depende de que la tesis de la «democracia participativa» implique una adhesión a alguna forma reconocible de democracia moderna, punto que es bastante discutible como ampliaremos más adelante.

Algunos autores como Gómez y Arenas (2002) y Arenas (2002) se han hecho eco de los nuevos análisis latinoamericanos del neopopulismo (Cammack, 2000; Philip, 1998; Roberts, 1995); según los cuales, éste se caracteriza por el discurso de rechazo radical al sistema político anterior y por el liderazgo carismático, pero puede tener una orientación socioeconómica de izquierda o de derecha neoliberal como Fujimori. Para estos autores, dadas las primeras medidas del gobierno bolivariano, entre ellas la continuidad de la política económica y el haber ratificado a la ministra de Finanzas del gobierno de Caldera, su ruta se asimilaba a la de los neopopulismos neoliberales, que utilizan el apoyo al cambio dirigido por un líder carismático para asegurar el respaldo a los sacrificios que entrañan las políticas de ajuste macroeconómico. Sonntag (2001), comparte esta aproximación al proyecto bolivariano con base en los primeros años de política económica del gobierno. Esta caracterización del proyecto bolivariano, implica su clasificación dentro de la categoría de la derecha autoritaria y ha sido popular entre los intelectuales y movimientos de izquierda ajenos al «chavismo». Éstos, inicialmente, rechazaron la ubicación del gobierno bolivariano en el terreno de la izquierda (Ellner y Hellinger, 2003: 225). DeCorso (2001) también caracteriza el modelo económico de los primeros años del gobierno bolivariano como «una mezcla anómala entre neoliberalismo y desarrollismo teledirigido desde el Estado», asociándolo a la promoción de la intervención militar directa en la política; es decir, al militarismo en los términos que lo define Pasquino (1997: 970). Con lo cual, también se suma a quienes, observando la gestión de los primeros años, concluyeron que la misma parecía indicar un proyecto de derecha autoritaria.

Otros autores han ubicado el proyecto en el marco de la izquierda, difiriendo en el carácter democrático o autoritario del mismo. Gott (2000) asume la condición izquierdista del proyecto, aunque al mismo tiempo nota indefinición en cuanto al proyecto económico, dada la continuidad inicial con las políticas del gobierno anterior. La ubicación de izquierda, para este autor, descansa en las declaraciones de Chávez en cuanto a la influencia que sobre él ejerció el militarismo de izquierda latinoamericano (Velazco Alvarado del Perú y Torrijos de Panamá); las expresiones que otorgan prioridad al combate contra la pobreza y la desigualdad y las alianzas, tanto para la organización de los golpes de Estado de 1992 como para la lucha electoral posterior. López Maya (2002) también indica como notas izquierdistas del proyecto su oposición a la globalización, el rechazo a la privatización de las empresas estatales, su carácter antiliberal y el tomar la igualdad social como uno de sus objetivos, con prioridad a la igualdad de oportunidades. En lo que respecta a la posición del movimiento bolivariano en cuanto a la democracia, López Maya (2002) apunta como rasgo basado en «El Árbol de las Tres Raíces», la referencia a la «Soberanía Popular»; es decir, la democracia plebiscitaria, sin llegar a considerar que éste sea un rasgo antidemocrático. También Pereira (2001) y Coppedge (2002) plantean cómo la concepción de la democracia del movimiento bolivariano,

definida por el MVR como «democracia patriótica» (Movimiento v República, 1998: 7-15), tiene como eje la tesis de soberanía popular en cuanto ésta puede oponerse a la democracia representativa, con lo cual notan también el carácter plebiscitario y posiblemente contrario a la noción prevaleciente en el mundo occidental de democracia.

Carlos Blanco (2002), considerando la trayectoria del movimiento bolivariano hasta finales del 2002, propone la caracterización del proyecto emeverrista como de izquierda autoritaria. Blanco basa su apreciación en las fuentes ideológicas y políticas a las que se han asociado Chávez y su movimiento desde sus inicios en la década de 1970, éstas son: la influencia política militar directa y expansiva, la acción dirigida al control partidario de todos los poderes públicos neutralizando los pesos y contrapesos democráticos, la actitud anticapitalista presente en las expresiones y políticas gubernamentales que proponen a la «oligarquía» como enemigo, la ambigüedad frente a la propiedad privada agrícola, que ha sido objeto de numerosas invasiones campesinas toleradas desde el gobierno; y el que se privilegie a la inversión privada extranjera mientras se es hostil a la nacional, lo cual se asimila con las políticas económicas de países gobernados por la izquierda autoritaria como Cuba.

Como vemos, la literatura académica se ha paseado por todas las categorías en la posible ubicación ideológica del movimiento bolivariano. Esta dificultad para definir ideológicamente al proyecto político del gobierno ha sido consecuencia de varios factores a los que antes nos referimos y sobre los que es conveniente elaborar un poco más. En primer lugar, la ausencia de una definición ideológica expresa por parte del movimiento bolivariano. Por el contrario, podría hablarse de un intento de cultivar la indefinición amparándose en las imprecisiones que obviamente se derivan de ubicar las fuentes ideológicas en héroes patrios del siglo XIX. En segundo lugar, la amplitud de la coalición que se integró en torno a Hugo Chávez para las elecciones de 1998. Como dijimos arriba esta coalición fue integrada por organizaciones y personalidades que cubrían las cuatro categorías ideológicas que estamos utilizando, sin que fuera claro hasta comienzos de 2002 cuál de ellos sería dominante. En la coalición actual predominan claramente la izquierda filo-cubana, que ha sido tradicionalmente hostil a la democracia representativa tanto en su versión venezolana, como conceptualmente; y el ala militar golpista en la que predominan también las posturas izquierdistas, aunque no de manera exclusiva. En tercer lugar, la manera gradual en que el gobierno ha ido planteando la confrontación política: en 1999 y 2000 se propuso y logró el control institucional y el desplazamiento de las fuerzas políticas tradicionales, Acción Democrática y COPEI, permitiendo a los sectores de derecha dentro de la coalición asumir la dirección de la propuesta económica dentro de la Constitución; después, desde finales de 2000 y en el 2001, se intentó controlar la Confederación de Trabajadores de Venezuela que fue forzada a elecciones universales y directas de su directiva. La derrota del candidato del gobierno fue seguida por el desconocimiento de la victoria del candidato de oposición y la confrontación abierta con la nueva dirección obrera. Durante el 2001, con base en una delegación amplísima de facultades legislativas, el presidente asume la labor legislativa dirigida a normar las áreas neurálgicas de la economía. La aprobación, mediante decreto ejecutivo, de cuarenta y nueve decretos leyes

marca el comienzo del enfrentamiento abierto con el sector empresarial, cuyo liderazgo formal es dejado totalmente de lado en el proceso de elaboración de estas leyes para la economía, que tampoco, como hemos dicho, fueron conocidas por la Asamblea Nacional hasta después de su promulgación. De estas leyes tiene particular importancia la Ley de Tierras, porque fue el detonante de los temores y la hostilidad abierta de los empresarios frente al proyecto bolivariano; y porque independientemente que logre llevarse a la práctica como un todo, parece definir los rasgos del proyecto socioeconómico del movimiento bolivariano. El rechazo a la negociación social, que se ha convertido en uno de los elementos más sólidos, explícitos y constantes de la acción de gobierno, aunado a la intención de imponer una planificación económica vinculante en el sector agrícola, según la Ley de Tierras, son desarrollos que permiten ver con más transparencia los colores ideológicos del gobierno y que nos llevan a proponer como hipótesis, que desarrollaremos en las secciones siguientes, su ubicación en el campo de la izquierda autoritaria.

III. EL PROYECTO BOLIVARIANO Y LA DEMOCRACIA

En las entrevistas concedidas a Blanco Muñoz, Chávez manifiesta un rechazo claro e inequívoco a la democracia venezolana como se practicó desde 1958 (Blanco Muñoz, 1998: 95, 119-122, 168). Este rechazo continuó y se acentuó en sus discursos después de asumir la presidencia. Ello, desde el punto de vista conceptual, fue oficialmente planteado como un rechazo a la democracia representativa y su necesidad de sustituirla por la democracia participativa. Esta tesis fue también sostenida a nivel internacional con motivo de la discusión en la Organización de Estados Americanos de la Carta Democrática. La democracia participativa fue adoptada como la posición ideológica alternativa frente a la democracia representativa en los documentos oficiales del Movimiento v República (1998) y plasmada en la Constitución Nacional (art. 6) en sustitución del principio de la representatividad. Como vimos antes, al referirse a la aplicación práctica de la democracia participativa, los autores tienden a concluir que la misma se acerca a la noción de democracia plebiscitaria; según la cual, las decisiones fundamentales deben ser tomadas directamente por la población y no por los cuerpos representativos. Como antes indicamos, un punto central en la caracterización del proyecto bolivariano como democrático o no, consiste en determinar si su noción de «democracia participativa» cumpliría los requisitos mínimos para que un país pueda ser considerado como democrático (Dahl, 1999: 97-115).

El uso de consultas populares directas sobre políticas públicas tiene históricamente una vertiente democrática y otra autoritaria. Es democrática, cuando la consulta popular puede ser solicitada abiertamente por todos los sectores políticos o sociales de la población en igualdad de condiciones y sirve, efectivamente, como un mecanismo por el cual la población puede controlar a sus gobernantes y resolver conflictos entre los poderes públicos. El uso de referendos en varios Estados de los Estados Unidos de Norte América, Suiza, Italia, Uruguay, etc., entran claramente en esta categoría. La democracia

plebiscitaria dejaría de ser democrática cuando la consulta directa a la población es utilizada como un mecanismo de aclamación del líder, cuya voluntad se impone sin discusión y es ratificada por una población que no se pronuncia sobre políticas, sino sobre si apoya o no al dirigente. Es decir, cuando es un mecanismo para gobernar sin control institucional. Pero, sobre todo, la democracia plebiscitaria sería una proposición no democrática cuando no es sincera. Es decir, cuando quien la propone acude o amenaza a sus opositores con referendos o cuando cuenta con la popularidad suficiente, pero se niega a que los mismos se realicen cuando existe la posibilidad de que sea derrotado. La aceptación de la apelación a la voluntad popular según reglas claras e iguales para todos, tanto cuando favorece al gobierno como cuando lo desfavorece, parece ser una condición esencial para que pueda considerarse la noción de democracia participativa como democrática.

Si quienes proponen la «democracia participativa» la utilizan sólo para evitar la discusión parlamentaria o social cuando están en mayoría, pero se valen del control que ejercen sobre el poder judicial o los organismos electorales para impedir que se hagan consultas populares cuando están en minoría, entonces no puede aceptarse que se trate de un proyecto democrático de reemplazo de la democracia representativa por un tipo superior de democracia.

El gobierno bolivariano utilizó el referéndum cuando estuvo en mayoría (tres se realizaron entonces). Sin embargo, a comienzos del 2003, cuando las encuestas comenzaron a indicar que no contaban con apoyo popular mayoritario, ejercieron presión y lograron impedir la realización de un referéndum consultivo sobre si el presidente debería o no renunciar. Al mismo tiempo, se han opuesto tenazmente a negociar con la oposición algún tipo de consulta popular adelantada sobre la permanencia del gobierno, o sobre medidas puntuales. La reciente conducta del gobierno parece indicar que la proposición de la democracia participativa es sólo instrumental. Se acude a ella para intentar neutralizar los mecanismos de la democracia representativa y avalar el hiperpresidencialismo, pero sólo mientras se cuenta con apoyo popular suficiente; cuando esto no es así, se bloquean los canales de consulta popular. Esta política de rechazar la democracia representativa y de proponer sustituirla por una supuesta «democracia participativa», respecto a la cual se tiene una actitud simplemente instrumental, indica, al menos, una ausencia de compromiso con los valores democráticos y la democracia. A ello se suman también, las dudas que se han levantado acerca del compromiso del Movimiento Bolivariano con la realización de elecciones limpias, después de sus acciones dirigidas a controlar políticamente el Consejo Nacional Electoral en el 2000 y a los serios cuestionamientos que ha hecho Kornblith (2001), en relación a la falta de apego del movimiento bolivariano a las normas que garantizan elecciones limpias con motivo de las elecciones de 2000.

La exaltación del intento del golpe de Estado del 4 de febrero, en la que se insistió durante la campaña electoral, ha continuado durante la gestión bolivariana. Los líderes del movimiento bolivariano sí han condenado el intento de golpe de Estado contra su gobierno del 11 de abril de 2002, pero no los intentos de golpe en que ellos participaron en 1992. Por el contrario, el 4 de febrero es conmemorado como una gran fecha

nacional, de importancia al menos similar a la del 23 de enero de 1958, cuando se derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ello implica una clara ambigüedad frente a la democracia y el golpismo. Habría golpes malos y golpes buenos. Serían condenables los golpes de Estado contra el gobierno bolivariano, pero no contra otro tipo de gobierno electo democráticamente. Esta ambigüedad frente a la legitimidad del derrocamiento de gobiernos electos democráticamente es otro signo de la falta de compromiso con los valores democráticos.

También es un signo de esta ambigüedad, la manera como el gobierno bolivariano tiende a situarse en el campo internacional. Asumiendo que está ubicado en la izquierda, tenía como alternativas acercarse a los países con gobiernos de izquierda democrática, a los países con gobiernos de izquierda autoritaria, o a ambos. La política exterior desde 1998 ha dado preferencia al acercamiento con gobiernos de izquierda autoritaria, tales como el de Cuba o China; con los cuales, hay una relación mucho más estrecha que con los gobiernos de la izquierda europea o el de Chile.

En el estudio «Élites Parlamentarias en América Latina», dirigido por Manuel Alcántara y aplicado en Venezuela por Elena Martínez Barahona (2002b: 132), se encuestó a cien diputados de la Asamblea Nacional entre octubre y noviembre del año 2000, cuarenta y siete de ellos del MVR, lo que representaba un 59% de los ochenta parlamentarios que fueron electos por el MVR, o por organizaciones menores o movimientos indígenas aliados en julio de 2000 (Molina y Pérez, 2002). Este estudio es presentado por Ramos Rollón (2002) y Martínez Barahona (2002a y 2002b) y permite analizar la posición de los diputados del Movimiento v República sobre la democracia y algunos de sus valores fundamentales. En las preguntas genéricas: en cuanto a la democracia, la mayoría de los parlamentarios del MVR se muestra partidario de ella, aunque significativamente menos que los diputados del resto de los partidos políticos (Ramos Rollón, 2002). El 84% de los diputados del MVR considera que «la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno», el 16% señala que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario. El porcentaje de apoyo a la democracia en los otros partidos es de 100% (Acción Democrática, Movimiento Al Socialismo, COPEI y proyecto Venezuela) (Ramos Rollón, 2002: 204 y 213). El 81% de los parlamentarios del MVR están de acuerdo con la afirmación de que «las elecciones son siempre el mejor medio para expresar unas determinadas preferencias partidistas» (Martínez Barahona, 2002b: 154); en los otros partidos el acuerdo con esta idea es: 88% en Acción Democrática y 100% en Movimiento Al Socialismo, COPEI y proyecto Venezuela. O sea que la mayoría abrumadora del MVR da un apoyo genérico a la democracia, aunque en menor medida que los otros partidos. Ahora, cuando se trata del apoyo a principios específicos de la democracia representativa la situación es distinta. Ante la posibilidad de que haya democracia sin que funcionen los partidos políticos, el 52% de los diputados del MVR están de acuerdo y el 48% la rechaza; mientras que en los otros partidos el rechazo a una democracia sin partidos alcanza el 94% en AD, el 75% en el MAS, el 81% en COPEI y el 75% en proyecto Venezuela (Ramos Rollón, 2002: 204 y 213; Martínez Barahona, 2002b: 156). Como vemos, un importante sector de los parlamentarios del MVR, mayoría en la encuesta, manifiesta actitudes contrarias a un principio central de la democracia representativa. Esto no sería un

indicador de ausencia de compromiso con la democracia, si pudiera decirse que su propuesta alternativa indica una forma superior o al menos igual de gobierno democrático; pero como vimos antes, éste no parece ser realmente el caso.

La encuesta venezolana del Estudio Mundial de Valores, realizada en Venezuela en diciembre de 2000, a una muestra nacional de 1.200 entrevistados, permite conocer la actitud frente a la democracia de los ciudadanos identificados con el Movimiento V República y los independientes con simpatía hacia ese partido, y compararla con el resto de la muestra. La actitud de los seguidores del MVR no es tan buen indicador de la orientación del proyecto político como la ideología predominante entre sus dirigentes; sin embargo, como quiera que ha sido demostrado que las opiniones de los simpatizantes partidistas tienden a ser influenciadas por el partido en aspectos relevantes para el debate político (Dalton, 2002: 181), es interesante ver cómo se ubican los ciudadanos emeurristas en relación a los otros partidos. Los simpatizantes del MVR (identificados con el partido o independientes pro) no muestran diferencias estadísticamente significativas con el resto de los venezolanos en cuanto al apoyo genérico a la democracia, o al rechazo a un gobierno autoritario. El 91% de los emeurristas considera que la democracia, a pesar de sus problemas, es la mejor forma de gobierno. Lo mismo piensa el 93% del resto de la muestra. El 50% de los emeurristas considera que sería bueno o muy bueno para el país que estuviera dirigido por un hombre fuerte que no tome en cuenta ni al gobierno ni a las elecciones, pero lo mismo piensa el 49% del resto de la muestra, en lo que es una clara inconsistencia en el apoyo a la democracia por parte de los venezolanos en general y no sólo de los partidarios del gobierno bolivariano. Inconsistencia que Inglehart (2003) encuentra presente como tendencia en los países no industrializados, y que genera dudas sobre el apoyo masivo que tiende a manifestarse en preguntas directas sobre la democracia en general. Sin embargo, otras preguntas revelan una inclinación menor hacia valores vinculados a la democracia entre los emeurristas en comparación con el resto de los venezolanos. En cuanto a «tener un gobierno militar», el 31% de los simpatizantes del MVR considera que sería bueno para el país, mientras que ese porcentaje es de 20% en el resto de la muestra (una diferencia estadísticamente significativa al nivel de $p < 0,001$). Es de notar, que aun en este caso, la mayoría de los simpatizantes emeurristas rechaza un gobierno militar, lo cual seguramente refleja el proceso de socialización democrática que vivió el país desde 1958 hasta 1998, uno de cuyos puntos de mayor insistencia fue el principio de la necesaria subordinación del poder militar al civil. Principio expresamente rechazado por el movimiento bolivariano, por lo cual no es de extrañar que sus seguidores muestren mayor aceptación del militarismo que el resto de los venezolanos. Otro campo donde aparece una diferencia estadísticamente significativa entre los simpatizantes del MVR y el resto de la muestra, es en lo que respecta a la actitud frente a la negociación política⁴. Entre

4. La pregunta del Estudio Mundial de Valores 2000 es: «En política, diferentes partidos tienen diferentes puntos de vista. ¿Cuál de estas dos cosas cree usted que es mejor? 1. Un líder político debe mantener firmemente las ideas en las que cree, aunque otros no estén de acuerdo; 2. Un líder político debe estar preparado para cooperar con otros grupos, aunque esto signifique ceder en alguna de sus creencias».

los emeurristas el 44% es contrario a la negociación política, mientras que esta cifra baja al 30% en el resto de la muestra (diferencia estadísticamente significativa, $p < 0,001$). Ello refleja el rechazo a la negociación política expresamente propuesto y practicado por Chávez como parte central de su proyecto. El «Pacto de Puntofijo», paradigma de la negociación política en Venezuela, por el cual los principales partidos que participaron en el derrocamiento de la dictadura se comprometieron a un gobierno de coalición, a un programa común y a dirimir sus diferencias en el marco democrático, ha sido presentado por Chávez como la fuente de la corrupción, el mal gobierno y la falsa democracia que, según él, azotó al país ininterrumpidamente desde 1958 hasta su inauguración como presidente. Pero más que eso, y en directa resonancia de su inspiración en principios militares, el gobierno bolivariano ha rechazado toda negociación con la oposición política y con los movimientos sociales, que en algún momento han sido adversarios de sus políticas. Hay muchos ejemplos, uno de ellos es el del proyecto de Ley de Educación. Éste fue negociado en el Parlamento en el año 2001 entre las fuerzas políticas, dirigidas por uno de los entonces miembros del ala miquilenista (centro-izquierda) del MVR y las organizaciones magisteriales públicas y privadas controladas por la oposición. Cuando se le presentó al presidente Chávez, éste lo rechazó y bloqueó su aprobación.

Algo similar sucedió con la reforma de la seguridad social. Durante la huelga general convocada por la oposición a partir de diciembre de 2002, el gobierno se negó a negociar seriamente algún acuerdo con ella, con lo cual extendió el conflicto más allá de lo que hubiera durado en otras circunstancias, prefiriendo despedir a dieciséis mil trabajadores petroleros en conflicto, antes que negociar con ellos el cese de la huelga. Esto tenía una finalidad claramente política: eliminar un foco de resistencia política, quitarle a la oposición el instrumento de presión que significa el control gerencial de la industria petrolera; pero igualmente indica hasta qué punto se prefiere imponer el proyecto político, en vez de negociar un curso de acción que implica reconocer como legítimos los intereses de los adversarios. La democracia no puede funcionar sin negociación política y social entre los diferentes actores y, principalmente, entre el gobierno y sus adversarios. El intento de imponer un proyecto político sin negociación alguna a un sector significativo de la población, sea la clase media y gran parte de la obrera organizada como en Venezuela o cualquier otro, no puede resultar sino en una confrontación que pone en peligro la estabilidad democrática. La falta de negociación ha llevado a la clase media y empresarial a sentir que sus intereses fundamentales se encuentran en inminente peligro, y a sentirse privados de lo que consideran su derecho a influir en las decisiones políticas que les conciernen. Sentimiento de privación relativa de derechos políticos y económicos basado en una percepción de amenaza a intereses fundamentales que son, según la teoría antes considerada, factores detonantes de la inestabilidad y la rebelión (Gurr, 1968 y 1974; Auvinen, 1997; Przeworski, 1991). La diferencia significativa entre los partidarios del MVR y el resto de la población, en lo que respecta al militarismo y a la negociación política, son también indicadores de la falta o debilidad en el compromiso con valores democráticos fundamentales por parte del proyecto político bolivariano.

IV. EL PROYECTO BOLIVARIANO EN EL EJE IZQUIERDA/DERECHA Y SU MODELO SOCIOECONÓMICO

Chávez y su movimiento no han sido explícitos en cuanto a su ubicación en el eje izquierda/derecha, tampoco en cuanto a su proyecto de modelo socioeconómico. Por el contrario, la coalición original de 1998 y las primeras políticas económicas, como señalamos antes, llevaron a algunos autores a considerar el proyecto como indefinido o incluso de tendencia neoliberal. Sin embargo, desde el principio hay indicios de la filiación izquierdista del gobierno, que si bien podían parecer en contradicción con las primeras orientaciones de la política económica o la integración original de la coalición gubernamental, hoy parecen encajar perfectamente con el giro tomado por la acción económica, la integración política actual de la coalición de gobierno y el «modelo de desarrollo endógeno» propuesto por el presidente Chávez después del paro nacional decretado por las principales organizaciones del movimiento empresarial y del movimiento sindical, conjuntamente con la oposición política desde diciembre de 2002 hasta comienzos de febrero de 2003.

Las declaraciones de Hugo Chávez a Agustín Blanco Muñoz, recogidas en el libro de este último *Habla el Comandante Hugo Chávez Frías* (Blanco Muñoz, 1998), revelan con claridad tanto la filiación izquierdista del proyecto como el intento por no definirse expresamente. La filiación izquierdista se revela por hechos como éstos: a) Desde los primeros intentos de conformar su movimiento militar, las alianzas que busca Chávez en el mundo civil son los movimientos de la izquierda insurreccional y, posteriormente, el ala radical de La Causa R (Blanco Muñoz, 1998: 132-136). Hecho que ha sido confirmado entre otros por Pablo Medina, uno de los principales líderes del ala radical de La Causa R y luego del PPT, quien plantea contactos reiterados entre Chávez y la izquierda radical venezolana desde 1977 hasta su triunfo electoral (Medina, 1999: 94-95, 110-116); b) Las simpatías internacionales que se expresan hacia el militarismo de izquierda latinoamericano (Blanco Muñoz, 1998: 39, 42-43, 45), los zapatistas, el Frente Farabundo Martí y las revoluciones cubana y china (Blanco Muñoz, 1998: 454), lo cual desde el gobierno se ha materializado en un acercamiento preferente a gobiernos y movimientos de izquierda, particularmente de la izquierda autoritaria como Cuba y China. En cuanto a la intención de cultivar la indefinición, hay muchas expresiones en estas declaraciones, entre ellas la siguiente: «Debemos tomar elementos del pensamiento universal y del actual, de la ciencia del marxismo, del capitalismo, del comunismo, de la experiencia de ese militarismo que va insurgiendo con nuevo signo y que hace dos décadas trató de implantarse en América Latina» (Blanco Muñoz, 1998: 73), o las diversas referencias al «Árbol de las Tres Raíces». Como hemos dicho, diversos elementos permiten ubicar hoy, más claramente, el proyecto bolivariano en el campo de la izquierda; y a su modelo económico, como el de una economía mixta políticamente controlada y en la cual se privilegian el sector cooperativo y público. En este sentido, consideraremos en primer lugar: la conformación actual de la coalición de gobierno, la posición de los parlamentarios del MVR en asuntos referidos al modelo económico y el eje izquierda/derecha; para luego considerar dos aspectos recientes de la política

económica: la Ley de Tierras y el «Modelo de Desarrollo Endógeno» esbozado por el presidente Chávez durante el mes de marzo de 2003.

La coalición de gobierno de 1998, denominada el «Polo Patriótico», tal como lo hemos señalado incluía a todo el espectro ideológico. Ello se refleja en la Constitución de 1999, que salvo su mayor énfasis en la justicia y la solidaridad social, en el campo económico presenta una amplitud similar a la de 1961, entre otras razones porque la parte económica de la Constitución estuvo coordinada por el sector de la derecha democrática de la coalición de gobierno, con el luego alcalde metropolitano Alfredo Peña a la cabeza y la presidencia de la Asamblea Constituyente estuvo a cargo de Luis Miquilena, máximo representante de la izquierda moderada dentro del partido de gobierno. Por ello, vemos cómo la Constitución consagra expresamente la libertad económica (art. 112) y el derecho de propiedad (115), y señala como principios rectores de la actividad económica (art. 299) los siguientes: libre competencia, iniciativa privada, función social de la propiedad, protección a las cooperativas y la pequeña y mediana industria. Hoy, tanto Peña como Miquilena, están en el campo de la oposición conjuntamente con sus seguidores; lo mismo ocurrió con el MAS, la principal organización de la izquierda moderada en el gobierno. Para mediados de 2003 quedaban en la coalición de gobierno además del Movimiento V República, el Partido Patria Para Todos, que está conformado por quienes integraron el ala radical de La Causa R, disidentes radicales del MAS y pequeñas organizaciones de la izquierda tradicional venezolana. Los empresarios de los sectores agrario, comercial, industrial y de los medios que inicialmente apoyaron al gobierno pasaron en su mayoría a la oposición más radical al mismo.

Los diputados del MVR a la Asamblea Nacional entrevistados para el estudio «Élites Parlamentarias en América Latina», al ubicarse en una escala que va del 1) izquierda al 10) derecha, lo hicieron como promedio en 3,6 y ubicaron a su partido en 4,1, en ambos casos en la centro-izquierda, y ubican a Chávez en 3,6. Ello coincide con la ubicación de 4,3 en la misma escala que sus simpatizantes daban al MVR en 1998, en una encuesta nacional que reporta Pereira (2001). También, según los resultados del estudio «Élites Parlamentarias en América Latina», los diputados del MVR presentan posiciones claramente más estatistas que el resto de los partidos en lo que se refiere al manejo de la economía (Ramos Rollón, 2002: 208-215). El 67% de los diputados del MVR apoya la intervención del Estado para el control de precios (AD 8%, MAS 33%, COPEI 50%, proyecto Venezuela 0%). En cuanto a la intervención del Estado para generar pleno empleo, ésta es respaldada por el 76% de los diputados del MVR (AD 47%, MAS 58%, COPEI 25% y proyecto Venezuela 25%). Como puede verse, los resultados de este estudio indican que los dirigentes del MVR ocupan posiciones claramente de izquierda en el espectro político venezolano y que se enmarcan en orientaciones ideológicas universalmente reconocidas como de izquierda. Como señalamos anteriormente, siguiendo a Bobbio (1995), lo característico de la izquierda es dar mayor apoyo que sus adversarios de la derecha a políticas orientadas a disminuir la desigualdad social, éste es el caso del MVR en Venezuela.

En cuanto a las posiciones de los simpatizantes del MVR de acuerdo a los resultados del Estudio Mundial de Valores, éstos aparecen más inclinados que el resto de los

venezolanos hacia formas de propiedad industrial usualmente propuestas por movimientos socialistas como la cogestión, autogestión o propiedad estatal ($p < 0,05$); así como a propiciar el aumento de la propiedad industrial pública en vez de la privada ($p < 0,05$). Las diferencias entre los simpatizantes del MVR y el resto de la muestra son significativas estadísticamente, pero de poca magnitud. En el primer caso, se trata de 58% del MVR frente a 51% del resto; y en el segundo punto, en una escala del 1 al 10, en que 1 indica preferencia por el aumento de la propiedad privada y 10 preferencia por el aumento de la propiedad pública, los simpatizantes del MVR se ubican en un promedio de 6,1, mientras que el resto se ubica en 5,4.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es un instrumento de política económica de particular importancia dentro del desarrollo del proyecto bolivariano, porque marca el inicio abierto de la que pudiera considerarse la rebelión masiva de la clase media contra el gobierno, o si se prefiere, para utilizar un término empleado tanto por el gobierno como por la oposición: de la contrarrevolución. Aunque antes se habían producido movilizaciones opositoras de menor escala, por ejemplo frente al proyecto de Ley de Educación. Esta ley es muy significativa tanto por la forma como fue dictada como por su contenido. En su forma se trató de un decreto presidencial con fuerza de ley, dictado por el presidente de la República conjuntamente con otras 48 leyes con base en delegación efectuada por la Asamblea Nacional, según lo autorizado por la Constitución de 1999. Ahora, en este caso, no sólo se obvió el debate parlamentario de una ley tan importante, sino que igualmente se obvió la negociación con los actores sociales organizados, particularmente los empresarios del campo. La ley fue planteada abiertamente como un acto unilateral del gobierno, que se impone a los «oligarcas» del campo para beneficio de los campesinos. Esto es, por una parte, un cambio radical respecto a los procedimientos políticos basados en la negociación que se venían aplicando desde 1958; y por la otra, un hecho que fue percibido por el sector empresarial como una agresión, tanto a lo que consideran sus derechos a la participación política como a sus intereses económicos.

Del contenido de la Ley de Tierras destacan cuatro aspectos a nuestro propósito: el régimen de explotación preferido, el régimen de propiedad de las tierras adjudicadas a los campesinos, el modelo de planificación adoptado y la experiencia en la aplicación inicial de la ley. La ley expresamente indica en su artículo cuarto que se privilegiará «el sistema cooperativo, colectivo o comunitario». Esta preferencia por mecanismos cooperativos de producción ha sido ratificada reiteradamente por el gobierno y forma parte del «Plan de Desarrollo Endógeno», propuesto recientemente. Se trata de una preferencia que, obviamente, refuerza el carácter de izquierda socialista del modelo bolivariano y concuerda con la ascendencia que el gobierno militar de izquierda de Velasco Alvarado en el Perú (1968-1974), tiene sobre el proyecto venezolano. Ahora, es claro que esta preferencia se inscribe en un modelo de economía mixta, que no excluye la explotación empresarial privada del campo. Es decir, hay una inclinación hacia modelos de producción favorecidos por la izquierda, pero éstos no excluyen al sector privado. El segundo aspecto relevante para nuestro análisis es el régimen de propiedad de las tierras; que sean adjudicadas a individuos o cooperativas. Quienes reciban estas

tierras en «propiedad agraria» no las pueden vender (artículo 12). Éstas se transmiten por herencia, pero no pueden ser vendidas. Con lo cual, quedan excluidas del mercado inmobiliario. Se trata de una muy fuerte limitación al derecho de propiedad que, igualmente, indica el carácter no liberal del proyecto bolivariano. En tercer lugar, y quizás lo más llamativo es el sistema de planificación de la producción agrícola. Se establece un sistema de planificación estatal vinculante. Es el Estado quien decidirá lo que debe producirse en las distintas áreas del país y los agricultores están obligados a acatar esta planificación y, en caso contrario, estarán sujetas a fuertes sanciones económicas (artículo 110, artículo 2, numeral 5). En cuarto lugar, la aplicación inicial de la Ley de Tierras ha estado cargada de retórica antiempresarial, así como de reclamos por parte de los productores privados, que han sido objeto de invasiones ilegales en sus propiedades sin que haya habido la diligencia debida por parte de los funcionarios oficiales⁵.

Durante el mes de marzo de 2003, en diversas alocuciones públicas y, especialmente, en su programa radial y televisivo semanal de los domingos «Aló Presidente», Hugo Chávez ha anunciado la instrumentación de un nuevo programa económico que él denomina «Plan de Desarrollo Endógeno»⁶. El nombre equívoco sigue en la línea de cultivar la indefinición. De lo dicho hasta ahora por el presidente Chávez sobre este plan, queda claro que se estimulará la producción cooperativa y la propiedad estatal bajo control político, para no depender de fuerzas «exógenas»; lo que incluye, según el presidente, al empresariado agroindustrial nacional. El presidente ha insistido en que después del despido de prácticamente toda la gerencia técnica de la empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), ésta es ahora verdaderamente nacional. Lo que ciertamente ha ocurrido, es que PDVSA está ahora bajo el control político de la coalición de gobierno y ya no representa un peligro de desestabilización política o económica. El «Plan de Desarrollo Endógeno» parece ser una respuesta al reciente paro sindical y empresarial que extiende a todo el sector productivo, especialmente el agrícola, la tesis de controlar políticamente todos los centros potenciales de desestabilización política. En el caso del «Plan de Desarrollo Endógeno», expresamente, se ha propuesto generar una red de producción e industrialización de los productos agrícolas fundamentales para la dieta diaria, al margen del control de los empresarios. Ello incluye cooperativas bajo control político y empresas estatales para la industrialización y comercialización. Esta idea es absolutamente coherente con uno de los rasgos centrales del proyecto bolivariano: el rechazo a la negociación social. El control político de PDVSA, como el de una red de producción agrícola alimentaria, así como antes del ejército, el poder judicial, y la Asamblea Nacional resultan necesarios cuando se rechaza la negociación y se espera resistencia por parte de los sectores a los que se impondrá un proyecto determinado. Particularmente, cuando esto se hace en una sociedad donde la negociación social ha sido parte central del sistema político. Frente al peligro que significaría un nuevo paro empresarial, sindical o de la gerencia de PDV-

5. Pueden verse al respecto los reportajes de Óscar MEDINA. Tierra Tomada y Manuelita Soy Yo, en la sección Expediente, Cuerpo I, del Diario *El Universal*, 27 de abril de 2003.

6. Diario *El Nacional*, 3 de marzo de 2003, p. A2. Diario *La Verdad*, 17 de marzo de 2003.

SA, la respuesta del gobierno bolivariano es la de generar mecanismos alternos de producción o el control político de los centros de poder; en ningún caso, la negociación que pueda llevar a un compromiso en el cual se incorporen los intereses de esos sectores en las políticas a desarrollar.

El proyecto bolivariano en lo económico puede ser caracterizado como de economía mixta en la cual conviven la empresa pública, con el sector empresarial privado y las cooperativas. Ello sería compatible con cualquier proyecto de izquierda democrática. Sin embargo, en el caso bolivariano, a este modelo se le imprime un carácter autoritario cuando se promueve el control político directo o indirecto de las áreas centrales del desarrollo económico; bien sea mediante la politización de las empresas públicas que habían desarrollado una capa gerencial autónoma como PDVSA, la planificación obligatoria de la producción agrícola o el fomento de cooperativas o empresas públicas controladas políticamente, para que sirvan de salida de emergencia frente a la acción de factores sociales descontentos con la acción gubernamental. Es cierto que una parte significativa de los sectores empresariales y las capas medias han estado dispuestos a apoyar incluso vías no democráticas para el cambio de gobierno; pero a esta situación, por demás injustificable, se llegó después de que el gobierno dejara claro que su proyecto no era negociable.

V. CONCLUSIONES

La literatura académica ha sido equívoca en cuanto a la clasificación ideológica del movimiento bolivariano. Ello se ha debido, en buena parte, al interés del movimiento bolivariano en cultivar esa indefinición; a la composición plural, desde el punto de vista ideológico, de la coalición inicial de gobierno; y a la gradualidad con la cual se ha avanzado en el campo económico, a partir de un inicio que parecía dar continuidad a las políticas liberales del gobierno anterior. Después de cuatro años de gestión, el análisis que hemos realizado en este trabajo nos permite ubicar la orientación ideológica predominante en el proyecto político bolivariano en el campo de la izquierda autoritaria. De izquierda, porque la política económica está claramente orientada por la prioridad a la reducción de la desigualdad social y porque se privilegia la producción en cooperativas, se implanta la planificación estatal vinculante en el sector agrícola, se persigue eliminar la autonomía gerencial de la empresa pública petrolera y, en general, el gobierno se orienta hacia una economía mixta que admite el capital privado extranjero y nacional, pero claramente subordinado políticamente; y privilegia la empresa pública o cooperativas, también subordinadas políticamente al proyecto bolivariano. Esta política es, por lo demás, coherente con la evolución en la coalición gubernamental que ha visto salir de ella, tanto a los representantes de la derecha como de la izquierda moderada, reduciéndola básicamente a la izquierda radical y el militarismo de izquierda. También es coherente con la creciente presencia de militares en el manejo de las empresas públicas y con la tendencia a favorecer la inversión extranjera sobre la nacional, dada su mayor tendencia a la colaboración con cualquier tipo de gobierno.

En cuanto a la clasificación como autoritaria de la orientación ideológica predominante, la misma se basa en la discusión que hemos hecho de la concepción bolivariana de la democracia, en particular de la llamada democracia participativa; y de la negativa a la negociación social como camino para impulsar las reformas. La tesis bolivariana de favorecer la democracia participativa o plebiscitaria sobre la democracia representativa, a pesar de lo que implica en cuanto a la aparición de la llamada democracia delegativa basada en el excesivo presidencialismo, el liderazgo carismático y la reducción de los controles horizontales sobre el poder, pudiera ser aceptada aun como un planteamiento democrático, si la misma implicara la intención de someterse a la consulta popular, tanto cuando hay seguridad de ganar como cuando la voluntad popular tiende a ser adversa. Es decir, si se planteara el recurso al referéndum en condiciones reales de igualdad para el gobierno y la oposición. Sin embargo, la gestión del gobierno bolivariano indica que éste no es el caso. La consulta popular directa se ha utilizado como un arma contra la oposición y una manera de dejar de lado la negociación social y el debate parlamentario, pero el gobierno bolivariano ha hecho uso de su control sobre las diversas instancias del poder público, particularmente el poder judicial, para adaptar estas consultas a sus intereses y para impedir u obstaculizar el uso de ellas por parte de la oposición cuando las encuestas han indicado una merma en su popularidad. Este uso oportunista de la «democracia participativa», aunado a la hostilidad ante la democracia representativa y la exaltación del golpismo bolivariano, revelan, por decir lo menos, una falta de compromiso con la democracia, a cuyas consecuencias nos referiremos más adelante en estas conclusiones.

El otro elemento que indica falta de compromiso con la democracia, es el rechazo a la negociación social manifestada en múltiples eventos que van: desde el proyecto de Ley de Educación, hasta el rechazo a alcanzar una salida electoral convenida con la oposición para resolver el paro nacional de fines de 2002 y comienzos de 2003. El rechazo a la negociación social implica que el proyecto económico del gobierno se intenta imponer a la sociedad y, particularmente, a la clase media y empresarial. Ésta, tal como ha ocurrido, tenderá a rechazar un proyecto en el que no se le permite participar en su elaboración y modificación. Este rechazo ha obligado al gobierno a recurrir a la fuerza para poder adelantar sus planes, y a negarse a cumplir la ley en lo que se refiere a la participación de las gobernaciones y alcaldías de oposición en el presupuesto nacional. En la medida en que los sectores sociales arrinconados por la imposición gubernamental incrementen su oposición, el gobierno se verá obligado a utilizar mecanismos de represión cada vez menos aceptables en una democracia. Así vimos cómo se utilizó el control político sobre la fiscalía y algunos jueces, para dictar autos de detención contra los líderes de la huelga nacional, con la intención de que sirvieran como mecanismo de punición en sí mismos y como instrumentos para amedrentar a la oposición.

La orientación ideológica del gobierno aparece, en los hechos, vinculada al proceso de rebelión de las clases empresarial y media, por cuanto el comienzo en firme de esta rebelión coincide con la aprobación sin negociación social del paquete de medidas económicas conocido como Ley Habilitante a finales de 2002. Paquete de medidas en el que destaca la Ley de Tierras. La aprobación mediante decreto ejecutivo y sin

negociación social, que incorporará en ellas, al menos parcialmente, los planteamientos de los sectores sociales afectados llevó, a estos últimos, el mensaje de que estaba en camino de realización un proyecto político que consideraban contrario a sus intereses y que en la aplicación del mismo no iban a ser consultados y tomados en cuenta. Este hecho, sumado a la decantación de la coalición de gobierno hacia el predominio de la izquierda autoritaria y al acercamiento expreso a países de signo no democrático, igualmente terminó por convencer a los sectores empresariales, las clases medias y los dirigentes de la principal central sindical del país, de que el gobierno pondría obstáculos para el juego democrático; de modo que la opción de desplazarlo del poder en un futuro cercano por vía electoral aparecía no sólo lejana, tomando en cuenta el daño que suponían iban a sufrir en el camino, sino bastante incierta. Es decir, en el marco teórico presentado al comienzo, la orientación ideológica de izquierda autoritaria, en la medida en que fue siendo percibida como tal por los sectores adversos al gobierno, generó un fuerte sentimiento de privación relativa no sólo en lo económico, sino también en el campo político. Este sentimiento de privación relativa en la medida en que se intensificó, alimentó la capacidad de movilización política de la oposición al gobierno, que fue dirigida no por los partidos políticos tradicionales o emergentes, sino precisamente por las organizaciones sociales de los sectores afectados: las organizaciones civiles de las clases medias, la Federación de Cámaras del Comercio y la Producción (FEDECÁMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Esta combinación de sentimiento intenso de privación relativa de lo que consideran son sus derechos socioeconómicos y de participación política, y de capacidad de movilización política, conjuntamente con un deterioro generalizado de la popularidad del gobierno, dada su incapacidad de mejorar las condiciones sociales de la población en general, cuyo hecho más sintomático ha sido el crecimiento del desempleo y la pobreza, son la causa inmediata de la inestabilidad sufrida por el sistema político venezolano a lo largo del año 2002 y del 2003. Ello, por supuesto, con el mar de fondo de los otros rasgos negativos desde el punto de vista de la estabilidad democrática que se han mantenido presentes bien sea en forma estructural, como el subdesarrollo y las deficiencias culturales en el respaldo a la democracia que le están asociadas (Inglehart, 2003); bien sobrevenidas como el decrecimiento económico, la desinstitucionalización, explosión numérica y polarización del sistema de partidos. Pero estos rasgos, por sí mismos, no habían dado lugar hasta diciembre de 2003 a una situación en la cual, sectores importantes de la sociedad con capacidad de movilización política utilizaran en forma abierta mecanismos no institucionales para revertir la situación política. Esta rebelión se desata por la incorporación al conjunto de elementos ya existentes de un proyecto político gubernamental de izquierda autoritaria y la percepción, por parte de las clases empresariales y medias, de que el mismo es contrario a sus intereses fundamentales y les sería impuesto sin negociación social o parlamentaria que les permitiera modificarlo sustancialmente.

La comprobación o reafirmación, treinta años después de la experiencia chilena y en un contexto internacional distinto, de que el adelanto de un proyecto político de izquierda genera en América Latina una reacción empresarial y media suficientemente fuerte como para poner en peligro la estabilidad de la democracia, es importante no

sólo con referencia al caso venezolano, sino por el hecho de que los gobiernos de izquierda parecen ser cada vez más probables en otros países. Como antes se señaló, además de Venezuela, en la primera mitad de 2003 había gobiernos con un fuerte componente de izquierda radical en sus coaliciones en Ecuador y Brasil, además la izquierda es la primera fuerza de oposición en Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. También es gobierno en Chile, pero en una coalición moderada de centro-izquierda. La experiencia chilena de los setenta y el caso venezolano actual, indican que la polarización ideológica es un factor de desestabilización. Específicamente, ambas experiencias parecen indicar que el adelanto de un proyecto político de orientación izquierdista sin negociación social con la clase empresarial y media, genera una fuerte inestabilidad, pone en peligro la democracia y dificulta en definitiva el adelanto de medidas de cambio social que reduzcan la desigualdad. Este peligro se acrecienta si las políticas de izquierda sin negociación social van acompañadas, como en el caso venezolano, de la percepción de que las vías democráticas para cambiar de gobierno se verían obstruidas. Aun cuando la rebelión no tenga éxito en derrocar al gobierno y las vías electorales permanezcan abiertas, la falta de inversión por parte de los sectores empresariales generará en el corto plazo un crecimiento del desempleo y la pobreza, que intensificarán la tendencia al deterioro político del gobierno que parece ser consustancial a los países subdesarrollados (Molina, 2001). Con lo cual, la izquierda resultaría derrotada en un ambiente de intensa polarización política del cual, probablemente, resulte la reversión de las políticas sociales que se intentó adelantar durante el gobierno de izquierda. Los gobiernos de izquierda en América Latina parecen estar asociados a un incremento fuerte de la inestabilidad, a menos que los cambios se adelanten dentro de un proceso de negociación social con los sectores empresariales y medios, y esté siempre perfectamente claro que la vía electoral continúa abierta como mecanismo de alternancia del gobierno. La reciente experiencia Chilena de una presidencia socialista sustentada en una coalición de centro-izquierda y el gobierno Luis Da Silva en Brasil, parecen indicar hasta ahora, que ciertamente la negociación social y la reafirmación democrática efectiva pueden evitar tendencias desestabilizadoras en países latinoamericanos gobernados por la izquierda. El peligro es que esto se haga a costa de no realizar cambios profundos. Aún está por verse si la izquierda latinoamericana desde el poder puede mantener la estabilidad política y, al mismo tiempo, motorizar cambios sociales profundos.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, Ángel. El Estado y la revolución protagónica. En RAMOS ROLLÓN, María Luisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 97-119.
- AUVINEN, Juha. Political Conflict in Less Developed Countries. *Journal of Peace Research*, 1997, vol. 34, n° 2, pp. 177-195.
- ARENAS, Nelly. Venezuela: ¿Del populismo rentista al populismo neoliberal? *Cuestiones Políticas*, 2002, vol. 29, julio-diciembre, pp. 45-71.

- BLANCO, Carlos. *Revolución y Desilusión. La Venezuela de Hugo Chávez*. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2002.
- BLANCO MUÑOZ, Agustín. *Habla el comandante*. Caracas: Fundación Cátedra Pío Tamayo, Universidad Central de Venezuela, 1998.
- BOBBIO, Norberto. *Derecha e Izquierda*. 2ª edición. Trad. Alexandra Piccone. Madrid: Taurus, 1995.
- CAMMACK, Paul. The resurgence of Populism in Latin America. *Bulletin of Latin American Research*, 2000, vol. 19, pp. 149-161.
- CANACHE, Damarys. *Venezuela Public Opinion and Protest in a Fragile Democracy*. Miami, FL: North-South Center Press/University of Miami, 2002.
- COPPEDGE, Michael. Soberanía popular versus democracia liberal en Venezuela. En RAMOS ROLLÓN, María Luisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 69-95.
- DAHL, Robert. *La Democracia. Una guía para los ciudadanos*. Trad. Fernando Vallespín. Madrid: Taurus, 1999.
- DALTON, Russell. *Citizen Politics Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. New York, NY: Chatham House Publishers, 2002.
- DE CORSO, Giuseppe. El modelo económico militar en el siglo XX: la experiencia de la década militar 1948-1958, el modelo de la Quinta República y la perspectiva histórica. En HERNÁN CASTILLO, Manuel; DONÍS, Alberto e IRWIN, Domingo (eds.). *Militares y Civiles. Balance y perspectiva de las relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001, pp. 143-157.
- DIAMOND, Larry; HARTLYN, Jonathan y LINZ, Juan. Introduction: Politics, Society and Democracy in Latin America. En DIAMOND, Larry; HARTLYN, Jonathan; LINZ, Juan y LIPSET, Seymour Martin (eds.). *Democracy in Developing Countries. Latin America*. 2ª edición. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1999, pp. 1-71.
- DUVERGER, Maurice. *Instituciones Políticas y Derecho Constitucional*. 6ª edición en castellano, de la 15ª edición en francés. Barcelona: Ariel, 1980.
- ELLNER, Steve. The Radical Potential of Chavismo in Venezuela: The First Year and a Half in Power. *Latin American Perspectives*, 2001, vol. 28, septiembre, pp. 5-32.
- ELLNER, Steve y HELLINGER, Daniel. Conclusion: The Democratic and Authoritarian Directions of the Chavista Movement. En ELLNER, Steve y HELLINGER, Daniel (eds.). *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization & Conflict*. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2003, pp. 215-226.
- GARRIDO, Alberto. *Documentos de la Revolución Bolivariana*. Caracas: Edición del Autor, 2002.
- GÓMEZ, Luis y ARENAS, Nelly. ¿Modernización autoritaria o actualización del populismo? La transición política en Venezuela. En RAMOS ROLLÓN, María Luisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 37-68.
- GOTT, Richard. *In the Shadow of the Liberator. Hugo Chávez and the Transformation of Venezuela*. London: Verso, 2000.
- GURR, Ted. Persistence and Change in Political Systems. *American Political Science Review*, 1974, vol. 68, diciembre, pp. 1482-1504.
- A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices. *American Political Science Review*, 1968, vol. 62, diciembre, pp. 1104-1124.
- HERNÁNDEZ, Carlos Raúl. La primera revolución postcomunista en América Latina. En HERNÁN CASTILLO, Manuel; DONÍS, Alberto e IRWIN, Domingo (eds.). *Militares y Civiles. Balance*

y perspectiva de las relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001, pp. 81-118.

HUNTINGTON, Samuel. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.* Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

INGLEHART, Ronald. How Solid is Mass Support for Democracy and How Can We Measure It? *PS: Political Science and Politics*, 2003, vol. 36, enero, pp. 51-57.

KORNBLITH, Miriam. Confiabilidad y transparencia de las elecciones en Venezuela: examen de los comicios del 30 de julio de 2000. En CARRASQUERO, José Vicente; MAINGÓN, Thaís y WELSCH, Friedrich (eds.). *Venezuela en Transición: elecciones y democracia 1998-2000.* Caracas: Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela-CDB Publicaciones, 2001, pp. 133-163.

LAITIN, David. Comparative Politics: The State of the Subdiscipline. En KATZNELSON, Ira y MILNER, Helen (eds.). *Political Science State of the Discipline.* Washington D.C.: American Political Science Association, 2002, pp. 235-265.

LEVINE, Daniel. Diez tesis sobre la decadencia y crisis de la democracia en Venezuela. En CARRASQUERO, José Vicente; MAINGÓN, Thaís y WELSCH, Friedrich (eds.). *Venezuela en Transición: elecciones y democracia 1998-2000.* Caracas: Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela-CDB Publicaciones, 2001, pp. 10-35.

LINZ, Juan. Presidential or Parliamentary Democracy: ¿Does It Make a Difference? En LINZ, Juan y VALENZUELA, Arturo (eds.). *The Failure of Presidential Democracy. The Case of Latin America.* Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994, vol. 2, pp. 3-90.

LIPSET, Seymour Martin. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 1959, vol. 53, n° 1, marzo, pp. 69-10.

LOMBARDI, John. Prologue: Venezuela's Permanent Dilemma. En ELLNER, Steve y HELLINGER, Daniel (eds.). *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization & Conflict.* Boulder, Co: Lynne Rienner, 2003, pp. 1-6.

LÓPEZ MAYA, Margarita. Organización y discurso del MVR y el PPT (explorando la capacidad de supervivencia de los actores emergentes en Venezuela). En RAMOS ROLLÓN, María Luisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001).* Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 177-194.

MAINWARING, Scott. *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil.* Stanford, California: Stanford University Press, 1999.

MAINWARING, Scott y SCULLY, Timothy. *Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America.* Stanford, California: Stanford University Press, 1995.

MAINWARING, Scott y SHUGART, Matthew S. Conclusion: Presidentialism and the Party System. En MAINWARING, Scott y SHUGART, Matthew S. (eds.). *Presidentialism and Democracy in Latin America.* Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 394-437.

MARTÍNEZ BARAHONA, Elena. ¿Ante un nuevo parlamento en la V República Venezolana? En RAMOS ROLLÓN, María Luisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001).* Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002a, pp. 217-246.

— La formación de una nueva clase política en Venezuela: ¿un cambio para seguir igual? En RAMOS, Alfredo (ed.). *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez.* Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada, 2002b, pp. 131-162.

MEDINA, Pablo. *Rebeliones.* Caracas: Edición del Autor, 1999.

MOLINA, José. The Electoral Effect of Underdevelopment: government turnover and its causes in Latin-American, Caribbean and Industrialized Countries. *Electoral Studies*, 2001, vol. 20, septiembre, pp. 427-446.

- MOLINA, José y PÉREZ, Carmen. Venezuela ratifica el cambio: elecciones de 2000. En RAMOS ROLLÓN, María Luisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 143-176.
- MOVIMIENTO v REPÚBLICA. *La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela*. Caracas: Movimiento v República, 1998.
- *El árbol de las tres raíces*. Caracas: Multicomercial 3000, 2000.
- O'DONNELL, Guillermo. *Counterpoints. Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1999.
- PASQUINO, Gianfranco. Militarismo. En BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco (eds.). *Diccionario de Política*. Mexico: Siglo XXI Editores, 1997, pp. 962-970.
- PEREIRA, Valia. Movimiento v República. En ALCÁNTARA, Manuel y FREIDENBERG, Flavia (eds.). *Partidos Políticos de América Latina Países Andinos*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, pp. 585-599.
- PHILIP, George. The New Populism, Presidentialism and Market-Orientated Reform in Spanish South America. *Government and Opposition*, 1998, vol. 33 (Winter), pp. 81-97.
- PRZEWORSKI, Adam. *Democracy and the Market Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991.
- PRZEWORSKI, Adam; ÁLVAREZ, Michael; CHEIBUB, José y LIMONGI, Fernando. *Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000.
- PUTNAM, Robert. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- RAMOS JIMÉNEZ, Alfredo. Los límites del liderazgo plebiscitario. El fenómeno Chávez en perspectiva comparada. En RAMOS JIMÉNEZ, Alfredo (ed.). *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Universidad de Los Andes, 2002, pp. 15-46.
- RAMOS ROLLÓN, María Luisa. Estructuración ideológica de los partidos y grupos políticos en Venezuela (1998-2000). En RAMOS ROLLÓN, Marisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 195-215.
- RIVAS LEONE, José. Antipolítica y nuevos actores políticos en Venezuela. En RAMOS JIMÉNEZ, Alfredo (ed.). *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Universidad de Los Andes, 2002, pp. 241-268.
- ROBERTS, Kenneth. Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case. *World Politics*, 1995, vol. 48, octubre, pp. 82-116.
- Social Polarization and the Populist Resurgence in Venezuela. En ELLNER, Steve y HELLINGER, Daniel (eds.). *Venezuelan Politics in the Chávez Era. Class, Polarization & Conflict*. Boulder, Co: Lynne Rienner, 2003, pp. 55-72.
- SARTORI, Giovanni. *Parties and Party Systems. A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- SHAPIRO, Ian. The State of Democratic Theory. En KATZNELSON, Ira y MILNER, Helen (eds.). *Political Science State of the Discipline*. Washington D.C.: American Political Science Association, 2002, pp. 235-265.
- SHUGART, Matthew S. y CAREY, John. *Presidents and Assemblies Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992.

SONNTAG, Heinz. Crisis and Regression: Ecuador, Paraguay, Peru and Venezuela. En GARRETÓN, Manuel y NEWMAN, Edward (eds.). *Democracy in Latin America (re) constructing political society*. Tokio: United Nations University Press, 2001, pp. 126-157.

TUFTE, Edward. *Political Control of the Economy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978.